

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA**

Auto Interlocutorio N°. 1457

RADICACIÓN : 76-111-33-33-001-2022-00390-00
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE : ORANGEL CAICEDO CAICEDO
notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com
DEMANDADO : NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION–
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO; TULUA
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co
juridico@tulua.gov.co
notjudicial@fiduprevisora.com.co
t_corduz@fiduprevisora.com.co

Guadalajara de Buga, 25 de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Estando agotado el termino de traslado de la demanda y de excepciones¹, y en turno el proceso para fijación de fecha de audiencia inicial del artículo 180 CPACA, y en ejercicio del control de legalidad establecido en el Artículo 207 Ibidem y artículo 132 del CGP, se realizó revisión oficiosa del presente proceso, considerándose procedente analizar si hay lugar a pasar el proceso para Sentencia Anticipada.

CONSIDERACIONES

El parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 estipula:

“las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso”; por su parte, el artículo 101 del CGP establece que “el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial”

De la revisión efectuada, se advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, no propuso excepciones previas.

¹ Archivo 21

El MUNICIPIO DE TULUÁ, Valle del Cauca, con la contestación de la demanda² propuso la excepción previa que denominó INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, CADUCIDAD DE LA ACCION, sustentada en que no se configuró el acto ficto, pues se dio respuesta el 22 de octubre de 2021, con oficio en el que se informó que no era competente el Ente Territorial para hacer el reconocimiento deprecado, y remitía al competente para su pronunciamiento³. Para el municipio tal respuesta es la voluntad de la administración y genera efectos jurídicos. Además, señala que esa respuesta se remitió a la apoderada del accionante, quien guardó silencio omitiendo agotar la vía administrativa, para acudir a la jurisdicción administrativa.

Al respecto, se dirá que no es de recibo lo planteado por el accionando, dado que el oficio que dice remitió a la apoderada de la parte activa, es un acto de trámite por su contenido, pues él mismo afirma que lo que se le contestó era la falta de competencia y que se remitía la petición por competencia para lo pertinente; es decir no decidió nada, solo transfirió la petición para que el competente le diera respuesta de fondo, la cual que nunca se dio, o al menos no está acreditado, sin que logre desvirtuarse la existencia del acto ficto.

Por las razones expuestas el Despacho declarará no probada la excepción previa de Inepta Demanda /Caducidad formulada por el municipio de Tuluá.

Comoquiera que no hay más excepciones previas por decidir, sería del caso fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011; no obstante, el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 faculta a la autoridad judicial para prescindir de las demás etapas procesales y en su lugar dictar sentencia anticipada. Estipulándose:

“Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

*El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, **se correrá traslado para alegar** en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.”*

² Archivo 19 fl 05,06

³ Archivo 19 fl 15-18

DECRETO DE PRUEBAS

Realizada la revisión probatoria de la parte activa ORANGEL CAICEDO CAICEDO, solicitó se decreten las siguientes pruebas documentales: Archivo 004 fl 45, 46.

“1. Solicito se oficie al MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y/O SECRETARIA DE EDUCACIÓN, para que se sirva certificar la fecha exacta en la que consignó como patrono de mi mandante las cesantías que corresponden al trabajo realizado como docente oficial al servicio de esta entidad territorial durante la vigencia del año 2020 en el Fomag, y el valor específico pagado por este concepto en esa fecha. Esta información ya fue solicitada a la entidad territorial, pero no fue contestada de manera congruente y para las results del proceso es indispensable que el despacho conozca la siguiente información:

A. Copia de la respectiva consignación o planilla utilizada para estos efectos, donde aparezca el nombre de mi representado, el valor exacto consignado y la copia del CDP que fue realizado para realizar el respectivo trámite presupuestal que ocasionó la erogación del gasto por este concepto.

B. Si la acción descrita en el literal A, obedece a que esta entidad, solo se realizó algún reporte a la Fiduciaria o el FOMAG, sin haber realizado algún pago – consignación – por concepto de las cesantías que corresponden a la vigencia del año 2020, sírvase expedir la respectiva constancia de este documento del reporte o informar sobre el trámite dado a esta cancelación.

C. Copia del acto administrativo, que ordenó el reconocimiento de esta cesantía anual a mi representado, por laborar el año 2020, al servicio de esta entidad territorial y que dio nacimiento a la consignación por parte de esta entidad a la acreencia cancelada en el Fomag. De lo contrario infórmeme sobre la inexistencia del acto administrativo y si se dio algún trámite para su realización.

2. Solicito se oficie al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, para que se sirva certificar de mi mandante que labora en la SECRETARIA DE EDUCACION DE GUADALAJARA DE BUGA, la fecha exacta en la que consignó las cesantías que corresponden al trabajo realizado como docente oficial al servicio de esta entidad territorial durante la vigencia del año 2020 en el Fomag, y el valor específico pagado por este concepto en esa fecha, así mismo la siguiente información:

A. Así mismo, sírvase expedir copia de la constancia de la respectiva transacción - consignación, que fue realizada de manera individual o conjunta que corresponda al concepto de cesantía de la vigencia laborada 2020, a favor del docente que aparece como demandante en el FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO – FOMAG.

B. Sírvase indicar la fecha exacta en la cual fueron cancelados los intereses a las cesantías sobre el monto acumulado de esta prestación, que le corresponden al docente solicitante, así como el valor cancelado, y que incluye el valor de las cesantías que fueron causadas y acumuladas hasta el año 2020.”

La anterior solicitud probatoria será denegada por considerarse innecesaria, teniendo en cuenta que el asunto bajo estudio se contrae a establecer la procedencia de aplicación del régimen de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

De la lectura realizada al cuerpo de la demanda se concluye que lo pretendido por la

parte demandante es el reconocimiento y pago de la sanción mora por la no consignación oportuna de las cesantías, así como el pago de la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses de las mismas. Definido lo anterior, se concluye que nos encontramos ante una negación indefinida “*la no consignación*” de ahí que la carga de la prueba se invierte, por ello quien debe demostrar que dicha consignación si se realizó, así como la fecha de la misma, es la parte demandada.

De la documentación aportada encontramos que en respuesta a la solicitud de la documentación en cuestión brindada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue explicado el procedimiento para el reconocimiento y pago de cesantías y sus respectivos intereses, y de la lectura al mismo, se infiere que la documentación solicitada es inexistente, por cuanto lo que plantea la demandada es que a los docentes no le son aplicables las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y que los recursos destinados al pago de estas prestaciones son girados por el Ministerio de Educación de manera global, lo que permite concluir que la documentación solicitada es inútil, pues pretende demostrarse un hecho que no ha existido, como lo es la consignación anual de las cesantías.

Por su parte, MINEDUCACION - FOMAG solicita requerir a la Secretaría de Educación del MUNICIPIO DE TULUA a efectos de que aporte las pruebas documentales que permitan evidenciar el trámite realizado respecto de la solicitud radicada por el demandante con relación al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99. Considerando que el Municipio con la contestación de la demanda allegó la documentación que se pretende, se negará dicha prueba.

Finalmente, el MUNICIPIO DE TULUA anexó pruebas documentales.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico se contrae en establecer si el acto administrativo ficto demandado se encuentra viciado de nulidad y como consecuencia de ello determinar si la señora ORANGEL CAICEDO CAICEDO tiene derecho a que la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague la sanción moratoria por la consignación no oportuna de sus cesantías, establecida en el artículo 99 de la Ley 59 de 1990; así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecidas en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y Decreto 1176 de 1991.

De igual manera, se deberá determinar si las entidades demandadas se encuentran o no legitimadas en la causa por pasiva.

En ese orden de ideas, se prescindirá de las demás etapas procesales y se dispondrá a emitir sentencia anticipada en forma escrita, en tal virtud, se correrá traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presenten sus alegatos de conclusión y a la representante del Ministerio Público para que emita concepto al respecto, si a bien lo tiene termino que correrá a continuación de la ejecutoria del presente auto.

En virtud de lo anterior, el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA,

DISPONE

PRIMERO.- DECRETAR como prueba los documentos acompañados con la demanda y la contestación de la demanda⁴, de conformidad con lo sustentado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. – NEGAR el decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante, de conformidad con lo sustentado en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO.- DECLARAR fijado el litigio en los términos establecidos en la parte motiva de este Auto.

CUARTO.- DICTAR sentencia anticipada de que trata el Artículo 182A del CPACA, por estar incurso en la situación contemplada en el numeral 1º, Literal B y C.

QUINTO.- CORRER traslado a las partes por el término de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión, y a la representante del Ministerio Público para que emita concepto al respecto, si a bien lo tiene; término que comenzará a correr a continuación de la ejecutoria de esta providencia.

SEXTO.- RECONOCER personería al abogado (a) EDID PAOLA ORDUZ TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía 53.008.202 y Tarjeta Profesional 213.648 del consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Ministerio de EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, para los términos y efectos del poder otorgado. Archivo 013.

SEPTIMO.- RECONOCER personería al abogado (a) ALONSO BETANCOURT CHAVEZ identificado con cédula de ciudadanía 94.367.905 y Tarjeta Profesional 129.431 del consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del MUNICIPIO DE TULUA, Valle Del Cauca, para los términos y efectos del poder otorgado. Archivo 19 fl 13.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

⁴ Archivos 05, 06, 07; 12; ,19 fl 15 ss

Firmado Por:
Laura Cristina Tabares Gil
Juez
Juzgado Administrativo
001
Guadalajara De Buga - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eb9196904a5a2791fc48512a2be8d20c2ec5c8a7f6c5d1a75385eeefc5a13594**

Documento generado en 25/11/2022 12:32:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>